



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: ANTONIO ALCIDES SÁNCHEZ SAENZ  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 020 2021 00129 01  
Sentencia: S-057

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. y ACP COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones en lo no recurrido, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

ANTONIO ALCIDES SÁNCHEZ SAENZ demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible,

disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, la devolución a Colpensiones de todas las sumas de dinero, así como la reactivación de la afiliación a esa entidad. Pretende además se condene en costas y agencias en derecho a las administradoras.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 29 de julio de 1961, estuvo afiliado en pensiones inicialmente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD- administrador por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- hoy Colpensiones; se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- administrado por PORVENIR S.A.; para la fecha de su traslado de régimen se encontraba vinculado laboralmente en con la sociedad Banco de Occidente.

Refiere que al momento del traslado de régimen la administradora PORVENIR no le realizó un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que le aparejaría permanecer o trasladarse de régimen pensional, no le explicaron las diferencias entre regímenes, no le informaron acerca del derecho de retracto, sobre los factores que se tenían en cuenta para determinar la fecha probable de la pensión y su monto, sobre la expectativa de vida ni su influencia en el monto pensional; no se le brincó explicación acerca de la necesidad de realizar aportes a fondo de pensiones voluntarios, o sobre la posibilidad de regresar al RPMPD.

Agrega que no tuvo reasesorías, que su mesada en el RPMPD es superior a la del RAIS pues recibiría la garantía de pensión mínima; por último, dice que presentó a PORVENIR S.A solicitud de documentación y a Colpensiones la aceptación de su traslado a esa

administradora, petición que le fue negada por comunicación del 12 de febrero de 2021.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES dice que acepta la edad del demandante, su afiliación al ISS, la negativa de traslado a esa entidad, así como su vinculación a AFP PORVENIR S.A. Sobre los demás hechos, manifiesta que no le constan por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por carecer estas de fundamentación legal y fáctica, además de que la afiliación del demandante fue a través de acto libre y voluntario, sin que existiera dolo, culpa, ni fuerza en el acto de cambio de régimen.

Como excepciones propuso inexistencia de nulidad y/ ineficacia en el traslado de régimen, saneamiento de la nulidad relativa alegada por la parte demandante aduciendo que fue inducida en error, buena fe de Colpensiones, prescripción, imposibilidad de condena en costas, excepción innominada.

Por su parte PORVENIR S.A. dijo que no le consta la edad del demandante, la fecha de afiliación al RPMPD y la solicitud de traslado presentada a Colpensiones el 12 de febrero de 2021. Sobre la afiliación a esa administradora, manifiesta que se atiene al formulario suscrito por el demandante en el año 1997, en el que se evidencia la libre escogencia del RAIS después de haber recibido información clara, precisa, veraz y suficiente acerca de las condiciones y características del mismo. Frente a los demás hechos, insiste en que al demandante se le brindó la asesoría necesaria vigente para la época conforme lo establecido en el artículo 64 de la ley 100 de 1993, en la que se expresó sobre el funcionamiento, características y requisitos del RAIS. Como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y excepción genérica.

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 27 de mayo de 2022, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

**“PRIMERO:** DECLARAR ineficaz el traslado del señor **ANTONIO ALCIDES SANCHEZ SAENZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.607.406, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-, por falta de consentimiento informado, lo que conllevó a un error en el consentimiento del demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., es decir, porque su decisión no fue libre y voluntaria...

**SEGUNDO:** DECLARAR que la afiliación al Régimen de Prima Media – RPMPD del señor **ANTONIO ALCIDES SANCHEZ SAENZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.607.406, no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, según lo establecido anteriormente.

**TERCERO:** CONDENAR a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.** a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** el cien por ciento (100%) de los aportes efectuados por el demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos los frutos y rendimientos financieros que sobre los mismos se hubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación del demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de régimen pensional, valores que deberán ser debidamente indexados.

**CUARTO:** CONDENAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-** a recibir los aportes que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.** le devuelvan como resultado de la ineficacia decretada, y a tener en cuenta el tiempo cotizado

*en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por el señor **ANTONIO ALCIDES SANCHEZ SAENZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.607.406, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral.*

*(...)"*

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, el apoderado de PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación solicitando sea revocada la sentencia teniendo en cuenta que no hay razón para declarar la ineficacia toda vez que el demandante no manifestó haber estado inconforme con el deber de información, su inconformidad radica en el no cumplimiento de una expectativa pensional la cual se encontró acreditada en el proceso, por lo que, de acuerdo con el artículo 271 de la ley 100 de 1993 debió haberse vulnerado el derecho a la libre elección de régimen pensional para que dicha afiliación quedara sin efecto y así declarar la ineficacia del traslado.

En cuanto al deber de información, dice que Porvenir tenía la obligación de brindar una información clara, completa y comprensible, pero teniendo en cuenta la normativa vigente a la fecha en que se efectuó el traslado, pues no estaba en la obligación de ofrecer dicha información acompañada de documentos distintos al formulario de afiliación, ya que se entendía no solo materializado sino válido el traslado de régimen y el consentimiento emitido con la sola suscripción de la afiliación conforme fue acreditado por Porvenir en el proceso.

Respecto a la devolución de dineros distintos a cotizaciones y rendimientos, manifiesta que es importante señalar que de igual forma en el RPM se destina un 3% de la cotización a financiar gastos de administración, pensión de invalidez y de sobrevivientes, sin embargo, no están llamados a financiar la prestación a la pensión de vejez y por ende no puede predicarse su imprescriptibilidad; agrega

que la devolución de esos dineros hacia Colpensiones va a generar un enriquecimiento sin causa a favor de esa entidad teniendo en cuenta que no hay una norma ni legal ni constitucional que disponga la devolución de esos gastos de administración los cuales le corresponden a Porvenir por su excelente gestión en la generación de rendimientos.

Por su parte el apoderado judicial de Colpensiones recurre la sentencia de primera instancia solicitando sea revocada pues Colpensiones es un tercero ajeno al negocio jurídico celebrado entre el demandante y el fondo privado, negocio del cual no puede verse perjudicado por el error en el cual incurrió el demandante ya que realizó su afiliación al fondo privado mediante un acto libre y voluntario pues no existió dolo o culpa y tampoco se ejerció ningún tipo de fuerza al momento de firmar el formulario de afiliación lo que llevaría a una ineficacia tal y como se indicó en el proceso, por lo anterior resulta totalmente adverso una condena a Colpensiones en un asunto en el que no tuvo injerencia alguna más aun cuando al recibir y pensionar a un afiliado que no aporta al régimen de prima media se descapitalizaría al mismo régimen, los aportes que se percibirían de los fondos del régimen de ahorro individual son dineros deteriorados con el paso del tiempo y que al momento en que el demandante se haga acreedor a una pensión resultarán insuficientes.

Referente a las cuotas de administración, si se ratifica la ineficacia del traslado, dice que le corresponde a Porvenir asumir a su cargo los deterioros sufridos por los bienes administrados, es decir, mermas sufridas por el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por pagos de mesadas, o por los gastos de administración, ello conforme a lo establecido en el artículo 963 de CC, y la sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008 de la CS de Justicia en la que se determinó que la administradora debe devolver todos los valores que hubiera percibido con motivo de afiliación, cotizaciones, bonos

pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos los frutos, intereses y rendimientos.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, en lo no recurrido.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término legalmente concedido, el apoderado de **Colpensiones** presentó alegatos de conclusión en los mismo términos que el recurso antes descrito, insistiendo que, en el evento en que la judicatura opte por acceder a las pretensiones de la demanda, solicita que se ordene a PORVENIR S.A., para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS, precisando los conceptos a reintegrarse.

Por su parte PORVENIR S.A. en los alegatos de conclusión dice que, no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado de Régimen de Prima Media al RAIS, pues la decisión del actor se realizó de forma libre y voluntaria, brindándosele una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación al RAIS. Sobre la condena de ordenar la devolución a Colpensiones la totalidad de la cuenta de ahorros individual, los rendimientos, frutos e intereses, el bono pensional, lo descontado de las cotizaciones con destino al fondo de garantía, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros, debidamente indexados, dichas condenas deben ser revocadas, puesto que condenar a pagar valores adicionales afectan la lógica jurídica, constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, determinar que se deben reintegrar los gastos de administración o las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que si no se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza.

## **CONSIDERACIONES:**

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por la AFP PORVENIR S.A. y ACP COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA -en lo no recurrido por esa entidad- conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* el Sr. ANTONIO ALCIDES SÁNCHEZ SAENZ nació el 29 de julio de 1961; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS- y realizó cotizaciones allí, el 23 de marzo de 1984; y *iii)* el 29 de enero de 1997 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PORVENIR S.A. entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado, siendo efectivo su traslado para el mes de marzo de ese mismo año.

### **Ineficacia del traslado.**

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al



afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>1</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008,

---

<sup>1</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;

- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, se destaca su manifestación en torno a que la persona que diligenció el formulario de afiliación a PORVENIR S.A. no era un asesor de esa entidad sino un funcionario del Banco Occidente del Grupo Aval donde trabajaba, que al firmarlo no lo leyó con detenimiento porque contenía información básica. Refiere que cuando *“los reunieron”* para el traslado no le explicaron la posibilidad de tener rendimientos con Porvenir, de pensionarse anticipadamente, no le explicaron sobre los aportes voluntarios, sobre qué pasaría con las cotizaciones en caso de que

falleciera, y que la pensionarse con Porvenir S.A. dependía del capital que ahorraba; refiere que le informaron que el ISS se iba a terminar y que era seguro pasarse para el fondo Porvenir S.A. porque era del mismo grupo, *“eso fue lo que básicamente nos explicaron”*.

De esto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello

mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a devolver.**

De otro lado, en cuanto a ordenar también la devolución de las cuotas de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, y demás conceptos –debidamente indexados-, tema discutido en el recurso y en los alegatos de conclusión, tanto por apoderado judicial de PORVENIR S.A., como por el apoderado judicial de COLPENSIONES, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelven a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas y/o gastos de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el Sr. ANTONIO ALCIDES estuvo vinculado a esa entidad.

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha

entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene el apoderado de PORVENIR S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la

declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado - contrario a lo dicho por la recurrente AFP PORVENIR S.A., no pueden estar sometidas a la prescripción.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. cuyas agencias en derecho se fijan por el valor de \$1.160.000 y a favor del demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el día 27 de mayo de 2022, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. cuyas agencias en derecho se fijan por el valor de \$1.160.000 y a favor del demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia



**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9fc29bba050b4d77a5877f63ba10c69f1773aa1fcc444d30fc1f0449f4827265**

Documento generado en 09/03/2023 02:51:41 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**